

Transición justa:

*Encuentros entre movimientos sociales en pos de la transformación social y ambiental
(Resultados de un taller internacional)*



Este documento fue compilado colectivamente por las organizaciones que participaron en el taller.

Foto de Portada: Lyda Fernanda Forero

Traducción al español: Analía Penchaszadeh

Diseño: Bas Coenegracht

El contenido de este informe se puede citar o reproducir con fines no comerciales y siempre que se mencione debidamente la fuente de información. El TNI agradecería recibir una copia o un enlace del texto en el que se utilice o se cite este documento. Obsérvese que algunas de las imágenes de este informe pueden estar sujetas a otras condiciones de copyright. <http://www.tni.org/copyright>

Esta síntesis del taller recoge los principales resultados y perspectivas de un taller que se realizó en Amsterdam en Octubre de 2019, donde participaron representantes de un espectro de organizaciones y discutieron la historia de sus articulaciones en torno a la Transición Justa, así como las lecciones aprendidas hasta ahora. El taller fue organizado por el Transnational Institute y Milieudefensie (Amigos de la Tierra Holanda). Adicionalmente, las organizaciones participantes incluyeron: Nigerian Labour Congress (NLC), Environmental Rights Action (ERA - AT Nigeria), Mondiaal Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV Mondiaal), CENSAT Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia, Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA-TUCA) y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Publicado por: Transnational Institute - www.tni.org
y Milieudefensie - Amigos de la Tierra Holanda - <https://milieudefensie.nl>

Amsterdam, Marzo de 2020

Síntesis

Introducción

Este documento breve busca compartir algunos de los planteamientos e interrogaciones claves trabajadas en una reunión de representantes de organizaciones sindicales y de justicia ambiental procedentes de países de África, Latinoamérica y Europa. En los últimos años han surgido intercambios y experiencias conjuntas entre estos dos movimientos, que son de gran importancia en la construcción de poder popular para avanzar procesos de transformación en distintos contextos a nivel mundial. Los participantes, provenientes de los tres continentes, se reunieron en Ámsterdam en 2019 para tratar los desafíos compartidos y debatir sobre los planteamientos comunes y las perspectivas futuras.

El concepto de “transición justa” (*Just Transition* en inglés) surgió en Estados Unidos durante la década de 1970. La propuesta surgió de las negociaciones sobre el cierre de una planta nuclear, sostenidas entre sindicatos, miembros de las comunidades y organizaciones ambientalistas. Esta nueva perspectiva dio paso a un movimiento creciente y representativo en Estados Unidos, que ha continuado fortaleciéndose e

incorporando otras dimensiones, tanto a nivel nacional como en un intercambio permanente con otros movimientos globales.

El concepto de “transición justa” (*Just Transition* en inglés) surgió en Estados Unidos durante la década de 1970. La propuesta surgió de las negociaciones sobre el cierre de una planta nuclear, sostenidas entre sindicatos, miembros de las comunidades y organizaciones ambientalistas.

En las siguientes décadas de 1980 y 1990, el concepto alcanzó más difusión y fue reconocido por diferentes actores a nivel internacional. En este período se valoró por ser un marco conceptual que puede reflejar las demandas de los y las trabajadoras ante los conflictos ambientales, y reunir diferentes formas de resistencia al modelo político-económico que destruye el planeta, concentra la riqueza y cada día explota a un mayor número de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo; cuyos impactos caen

desproporcionadamente sobre las comunidades más marginadas. Aunque el debate sobre transición justa se originó en torno a los sectores energético y extractivo, el uso de la energía está en la base de nuestros sistemas alimentarios, el transporte y servicios públicos, y del sistema de producción y distribución. Por ello, una transformación del modo en el que usamos y concebimos la energía requerirá transformaciones profundas en cada uno de los sectores de la economía.

A comienzos de la segunda década del siglo XXI y, en particular, después de la aprobación del Acuerdo de París en 2015, se ha generado un creciente número de propuestas para construir alianzas entre los movimientos sindicales y otras organizaciones y movimientos por la justicia social y ambiental. Estas alianzas utilizan acciones conjuntas para desarrollar una visión amplia y profunda de la transición justa.

Sin embargo, el concepto de transición justa no ha pasado inadvertido ante los poderosos actores políticos y económicos. Algunos gobiernos y empresas transnacionales están promoviendo visiones bajo el nombre “transición justa”, a través de iniciativas que no responden al significado de esta, pero que les

permiten mantener dinámicas extractivas y de lucro, denominadas “falsas soluciones” por los movimientos sociales a nivel mundial. Se han presentado una serie de “soluciones” alarmantemente problemáticas, que incluye el sistema de límites e intercambio de bonos de carbono, la captura de carbono o la geoingeniería y la promoción de plantaciones de monocultivo a gran escala para agrocombustibles, entre otros. En general, estas soluciones suelen plantearse desde una visión limitada que presenta iniciativas como “cero emisiones netas” (que se consiguen a través de mercados de carbono) o reducciones de emisiones marginales sin responder a los problemas económicos, sociales, ambientales o a los derechos humanos. En efecto, muchas de estas propuestas agravan las desigualdades; expulsan a las comunidades de los territorios; reducen el control democrático sobre los recursos; privatizan los bienes comunes y los servicios públicos; incrementan la explotación de las masas trabajadoras, perpetuando los aspectos más perjudiciales del sistema económico actual. Se trata de lo opuesto a los principios de la transición justa liderada por los movimientos populares, que concibe los daños ambientales como manifestación de una crisis más amplia.



Evento de Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo en Cumbre de los Pueblos, Santiago de Chile, diciembre 2019. Crédito: Lyda Fernanda Forero

Los movimientos sociales han respondido a ello con propuestas de unidad para garantizar que el concepto no pierda su significado ni sea capturado por actores para continuar promoviendo un status quo disfuncional. Por tanto, la transición justa no se considera solo un término en disputa, sino que, más allá, es un espacio de disputa en el que los movimientos sociales están interviniendo, para definir una comprensión compartida del término. Una visión sólida y radical de la transición justa concibe la destrucción ambiental, la dinámica

extractiva del capitalismo, la violencia del imperialismo, la desigualdad, la explotación y la marginación tanto racial, de clase y de género (entre otros) como efectos simultáneos de un sistema global único que debe ser transformado. Los y las impulsoras de la transición justa afirman, desde una visión estructural, que aquellas “soluciones” que intentan abordar una sola dimensión de la crisis (por ejemplo, la catástrofe ambiental) aislada de las estructuras sociales, culturales y económicas que la generan, inevitablemente son “falsas soluciones”.

El desarrollo, profundización y aplicación de este análisis a las situaciones diversas, complejas y locales constituye en sí mismo un largo proceso de construcción de entendimientos comunes y de solidaridad. Una parte importante del proceso consiste en explorar, comprender y resolver las tensiones potenciales entre movimientos que históricamente se han considerado distantes. Los movimientos son diversos, tienen prioridades, compromisos y modos de trabajo distintos, y su concepción de lo que significa una transición justa puede distar en muchos aspectos. Esto significa que urge, ahora más que nunca, construir análisis conjunto, valorar y visibilizar las reflexiones que han resultado de años de colaboración, así como las diferencias teóricas y estratégicas, y cómo estas fueron superadas.

Los movimientos que en la actualidad comienzan a consolidar propuestas bajo el término de “transición justa” tienen una historia muy enriquecedora. Nos referimos a los movimientos contra los acuerdos de libre comercio y el neoliberalismo; el movimiento alter y antiglobalización; las luchas por la democracia y la soberanía energética; los movimientos por la justicia ambiental; los movimientos sindicales; las luchas

por la independencia y la descolonización; los movimientos contra el racismo y el apartheid; los movimientos de mujeres y feministas; las luchas por la reforma agraria; los derechos campesinos y la soberanía alimentaria, entre otros, que han contribuido a asentar las bases del debate actual. Toda esta diversidad de acumulados, tradiciones políticas y objetivos estratégicos implica que el diálogo sobre una visión radical de la transición justa difícilmente estaría libre de tensiones ni contradicciones. Sin embargo, parece cada vez más claro que una masa crítica de organizaciones y movimientos han comprendido la importancia vital de superar estas tensiones para forjar alianzas cada vez más fuertes y radicales para así alcanzar la transformación sistémica.

Con este informe se comparten algunas visiones, en el marco de un diálogo mucho más amplio y, con ello, proporcionar modestamente aportes para el debate. Se aspira a compartir nuestra perspectiva sobre los principios del concepto de transición justa, que emergen de las experiencias de luchas compartidas, y a reflexionar sobre los modos en los que se debe defender esta visión radical, así como las formas de ponerla en práctica.

Hacia una transición justa: alianzas y posibilidades nuevas

Surgimiento de procesos y alianzas

En octubre de 2019, los participantes de una serie de organizaciones se reunieron para hablar sobre la historia de sus experiencias de colaboración y las lecciones aprendidas de ellas. Este taller a puerta cerrada fue organizado por el Transnational Institute (TNI) y Milieudefensie - Amigos de la Tierra Holanda. Además de estas dos entidades con sede en los Países Bajos, participaron: Nigeria Labour Congress (NLC), Environmental Rights Action - Amigos de la Tierra Nigeria (ERA-AT Nigeria), Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia (CENSAT-AT Colombia), Confederación Sindical de Trabajadoras/as de las Américas (CSA-TUCA), y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC). Los y las participantes compartieron sus experiencias con tres ejemplos de alianzas entre organizaciones sindicales y de justicia ambiental. Estas tres experiencias en distintas regiones muestran cómo el concepto de transición justa está permitiendo catalizar y dar forma a intercambios, al tiempo que pone en práctica una visión más radical e inclusiva del cambio social y ambiental.

Nigerian Labour Congress. (NLC) y Environmental Rights Action (ERA-AT Nigeria)

Los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) reconocen la necesidad de recoger sus diversas experiencias en la construcción de una visión compartida de la transición justa. Desde 1990, han existido diferentes oportunidades para ese intercambio en Nigeria. Sin embargo, han sido experiencias intermitentes, lideradas por las demandas de los y las trabajadoras por el reconocimiento de sus derechos y por mejores condiciones laborales. Esos espacios incluyeron movilizaciones conjuntas de los y las ciudadanas y trabajadoras de los sectores formales e informales contra los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional a fines de la década de 1980, protestas contra la eliminación de los subsidios a los productos derivados del petróleo por parte del gobierno nacional, que llevó a un incremento de los precios de la gasolina en las décadas de 1990 y 2000. Otros aspectos de gran importancia, como las violaciones a los derechos humanos, la degradación y conservación

ambiental, que habrían podido llevar a intercambios y acciones conjuntas, no resultaron en el mismo tipo de colaboración. Como resultado, las actividades de los sindicatos se han distanciado en algunos aspectos de los intereses de las organizaciones sociales y ambientales, llevando, en algunos casos, a divisiones entre los movimientos.

A través de esta articulación, que comenzó en 2017, los sindicatos y las OSC han aprendido a colaborar de forma abierta y participativa y así reducir las divisiones entre estos movimientos tan importantes y a fortalecer los derechos de las personas trabajadoras y las voces de la ciudadanía sobre los desafíos de una transición justa.

Los sindicatos y las OSC deben crear nuevas formas de trabajo conjunto para proteger los derechos humanos, el acceso a la justicia y el ambiente, con el fin de garantizar una lucha unificada y fortalecida por la transición justa. En particular, el intercambio y colaboración reciente entre el NLC y ERA-AT Nigeria para la incidencia sobre la transición justa en base a la evidencia, creó

oportunidades importantes para los movimientos laborales y las OSC para explorar conjuntamente el significado de la transición justa para los y las ciudadanas y trabajadoras, especialmente en los sectores petrolero y agrícola. Estas perspectivas amplias son necesarias para reconocer la experiencia en la lucha contra el cambio climático, la protección de los derechos y medios de sustento de los y las trabajadoras y para asegurar una transición justa desde el modelo de producción y consumo actual hacia una economía de “cero-carbono”. A través de esta articulación, que comenzó en 2017, los sindicatos y las OSC han aprendido a colaborar de forma abierta y participativa y así reducir las divisiones entre estos movimientos tan importantes y a fortalecer los derechos de las personas trabajadoras y las voces de la ciudadanía sobre los desafíos de una transición justa. Esto puede contribuir a definir los cambios en los modos de producción y consumo que son necesarios para mantener la resiliencia del planeta Tierra y para preservar los ecosistemas en Nigeria y en el mundo. Las sinergias entre el mayor movimiento ambiental y el poderoso NLC seguro generará oportunidades de movilización por una transición justa entre sectores y profundizará el aprendizaje mutuo y el desarrollo de estrategias eficaces.

Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas. (CSA-TUCA) y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Las articulaciones entre los movimientos sindicales y ambientalistas en Latinoamérica y el Caribe tienen una larga historia, estas alianzas también han incluido otros movimientos y organizaciones sociales. Los y las participantes identificaron el año 1992 como una fecha importante para la consolidación de alianzas. En ese año se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y se conmemoraron los 500 años de resistencia indígena, negra y popular a la colonización. Esta acción conjunta ha continuado desde entonces, fortaleciendo los análisis y estrategias, articulando respuestas de los movimientos a los diferentes desafíos históricos. Entre otros, ello permitió sentar las bases de la exitosa campaña contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que estuvo en vigor entre 1999 y 2005.

Durante los años de la campaña contra el ALCA, los distintos movimientos llevaron a cabo toda una serie de acciones conjuntas, que incluyeron movilizaciones y actividades de formación y discusión. En particular, esas experiencias de articulación permitieron consolidar alianzas entre los sindicatos, los

movimientos por la justicia ambiental, estudiantiles, campesinos, feministas, indígenas, de cancelación de la deuda externa, entre otros. Es importante destacar que se trató de una alianza consolidada en torno a intereses de clase y guiada por un sentido inclusivo e integrador. Algunas de estas organizaciones convergieron en la Alianza Social Continental.

Los diferentes ciclos de gobiernos progresistas y reaccionarios en la región han llevado a procesos y respuestas distintos en los ámbitos nacionales y el regional. Sin embargo, los y las participantes del taller identificaron una clara tendencia hacia la integración de diálogos regionales: la CSA-TUCA junto a las organizaciones campesinas, feministas y ambientalistas (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, y ATALC) entre otras, mantienen un constante intercambio de información y diálogo sobre sus estrategias y trabajo conjunto.

Este intercambio permanente ha contribuido a la construcción de confianzas entre los diferentes movimientos. Al mismo tiempo, ha ayudado a redefinir la “cuestión ambiental” en relación al trabajo, desarrollando una visión de la organización social del trabajo, orientada

hacia la dignificación de la vida humana y no humana. En esta concepción, la producción estaría ligada a los ritmos de la reproducción de la naturaleza. Este análisis busca una reinterpretación emancipadora del trabajo, que integra el trabajo productivo y reproductivo en lugar de aislarlos, para redefinir los usos y valor de la fuerza de trabajo.

La perspectiva amplia y de unidad en la región se ha reflejado en la defensa de las propuestas y los derechos de los pueblos frente al poder corporativo y el neoliberalismo, así como en las propuestas por la construcción de democracia. Esto fue parte del énfasis de los mensajes en la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro / Río +20, en 2012.

Como ejemplo de consolidación de intercambios permanentes y análisis conjunto entre movimientos sindicales y ambientalistas, los y las participantes del taller presentaron el caso de la Plataforma de Desarrollo de las Américas, un documento estratégico elaborado por los sindicatos en diálogo con otros movimientos, entre 2013 y 2014. El documento presenta una visión sobre el desarrollo sustentable y articula otras propuestas sobre justicia ambiental, económica y social. Del mismo modo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, un espacio

regional (que incluye organizaciones de Norteamérica) de alianzas, movilización, análisis y estrategias conjuntas para enfrentar la actual ola de autoritarismo y el avance de la derecha, contribuye a fortalecer el diálogo y a desarrollar acciones conjuntas y continúa reflexionando sobre visiones de la transición justa.

El momento inicial de convergencia que dio paso a este espacio tuvo lugar en torno a la conmemoración del décimo aniversario de la derrota del ALCA en 2015. Este momento contribuyó a convocar a los movimientos para enfrentar conjuntamente los ataques a la democracia. Desde 2015, la Jornada Continental ha sido un espacio de acciones colectivas en el continente y ha creado nuevos momentos para la convergencia de análisis y estrategias.

Sin embargo, a pesar de la vitalidad de estas alianzas y redes, existen retos importantes en la región. En el ámbito nacional, pero también de forma más general en toda la región, hay cada vez más amenazas de fuerzas de extrema derecha, incluidas las nuevas olas de gobiernos autoritarios que amenazan gravemente a los movimientos por la emancipación y transformación. Globalmente, los cambios en la forma como se organiza el trabajo, plantean nuevas amenazas para los movimientos

sindicales tradicionales: un creciente discurso acerca del “futuro del trabajo” (y algunas veces el “fin del trabajo”), la emergencia de las llamadas “tecnologías disruptivas” y “capitalismo de plataformas tecnológicas”, que han impactado los derechos conquistados por los y las trabajadoras, y la creciente influencia de la economía digital son factores críticos que afectan a los movimientos por una transición justa.

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), y Milieudefensie- Amigos de la Tierra Holanda

El intercambio y articulación entre FNV y las principales organizaciones ambientalistas en los Países Bajos comenzaron en 2013 a partir de un acuerdo sobre energía en el Consejo Económico y Social de ese país. Organizaciones como Natuur en Milieu, Milieudefensie y Greenpeace tienen sus objetivos particulares, pero comparten valores clave con los movimientos sindicales. En los años que siguieron a 2013, la articulación entre FNV y las organizaciones ambientalistas condujo a un número creciente de actividades conjuntas. Por ejemplo, FNV participó en el grupo asesor para un estudio de CE Delft, promovido por Milieudefensie en 2016. Esta investigación analizó la distribución de los costos de la política climática.

El movimiento sindical lucha por el trabajo decente, sistemas de salud y seguridad social para los y las trabajadoras, basados en la solidaridad. A su vez, la sustentabilidad y la transición justa se han convertido cada vez más en un tema central para el movimiento. Las organizaciones ambientalistas y los movimientos sindicales se encontraron en torno al mensaje “no hay empleos en un planeta muerto”.

Estas articulaciones se profundizaron en 2017: mientras se formaba un nuevo gobierno en los Países Bajos, FNV y tres organizaciones ambientalistas escribieron conjuntamente un “Manifiesto por la Transición Justa”. El manifiesto hace énfasis en la importancia de una distribución equitativa de los subsidios climáticos, la participación ciudadana en las transiciones energéticas en sus ciudades y pueblos, un plan para trabajos verdes, la construcción y/o renovación de 250,000 casas sustentables cada año y en precios accesibles para los productos limpios y saludables, mientras las alternativas contaminantes se hacen más caras.

En 2018, FNV y Milieudefensie colaboraron ante un nuevo acuerdo de energía en el Consejo Económico y Social, con énfasis en aspectos relacionados con el empleo. En este reporte, titulado

“Transición Energética y Empleo: oportunidades para un futuro sustentable”, todas las organizaciones de la alianza acordaron siete recomendaciones claves, pidiendo al gobierno de los Países Bajos que asuma compromisos concretos y fuertes en relación a las necesidades de la población trabajadora y de la sociedad en general, en el marco de las discusiones sobre la transición energética. Las organizaciones pidieron conjuntamente que el gobierno proteja los derechos de los y las trabajadoras del presente y el futuro, a través de educación, perspectivas integradas para el desarrollo de empleos verdes, compensación por la pérdida de trabajos y el énfasis en la provisión de trabajo decente en las industrias verdes emergentes.

Este movimiento también ha tenido lugar a nivel internacional. En abril de 2018, Mondiaal FNV participó en la conferencia sobre la Transición Energética Justa con organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias de Nigeria, la República Democrática del Congo, Uganda y los Países Bajos, para fortalecer una campaña de incidencia por la Transición Energética Justa. Como resultado de dicha conferencia, Mondiaal FNV y Milieudéfensie ahora apoyan la colaboración entre el NLC (contra parte de Mondiaal FNV) y ERA-Nigeria que se desarrolla en Nigeria.

A mediados de 2018, una alianza de distintas organizaciones incluyendo a FNV y Milieudéfensie, envió un memorando en el marco de las discusiones del Consejo Climático sobre los beneficios y costos del Acuerdo sobre el Clima de los Países Bajos¹. Más de 150 organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas por el gobierno para hacer acuerdos sobre cómo alcanzar las metas del Acuerdo de París. El proceso duró más de un año y en ese marco se consolidó una alianza “roja – verde” entre FNV y Milieudéfensie. Progresivamente, esta alianza se hizo más fuerte, culminando en una carta conjunta de ultimátum en octubre de 2018, una conferencia de prensa conjunta en diciembre del mismo año (FNV, Greenpeace y Milieudéfensie convocaron para rechazar los acuerdos preliminares incluidos en el Acuerdo sobre el Clima de los Países Bajos) y la organización de una gran marcha por el clima en marzo de 2019 (la mayor concentración por demandas ambientales en la historia de los Países Bajos). FNV y Milieudéfensie fueron los principales organizadores de esta marcha. De acuerdo con uno de los periódicos locales, la marcha conllevó a un cambio radical en la política del gobierno de los Países Bajos. Tres días después de la movilización, el Primer Ministro anunció que los hogares no serán quienes deban pagar por los costos de la reducción

de emisiones de CO2 sino los grandes contaminantes y que los primeros serán compensados por los costos asociados a la política climática.

Esta coalición fortaleció tanto al movimiento sindical como a las organizaciones ambientalistas y contribuyó a un mejor Acuerdo Sobre el Clima. Aun cuando hay mucho por hacer, la identificación de valores compartidos y el énfasis en ellos ha sido un paso fundamental.

Entre las estrategias pactadas alrededor del Acuerdo sobre el Clima, las diferentes organizaciones llegaron a la conclusión de que FNV se levantaría de la mesa de negociación si los compromisos ambientales del Acuerdo eran insuficientes, mientras que las organizaciones ambientalistas abandonarían la misma si el “fondo de carbón” propuesto por FNV para garantizar los recursos para la población trabajadora que pierda sus empleos por el cierre de plantas de carbón, no estaba asegurado. Otro de los resultados de este esfuerzo combinado entre los movimientos ambientalista y sindical es que la justicia climática se ha convertido en

un concepto ampliamente reconocido en el debate político de los Países Bajos.

La articulación estuvo bajo presión por una contra-campaña promovida por el sector empresarial en respuesta a las demandas de los movimientos por impuestos a quienes contaminan. Esta contra-campaña movilizó a los consejos de trabajadores de las industrias de uso intensivo de energía y a otros sindicatos en contra de un “impuesto al carbono”. Argumentaban que el impuesto llevaría a una pérdida de empleos, pues las compañías tendrían que desplazar sus inversiones a regiones con menores costos (donde no hubiese impuestos al carbono). Esta situación generó una presión pública significativa sobre FNV. Si bien el sector empresarial organizado no consiguió cambiar los términos del debate ni los resultados de la política en una dirección favorable a sus intereses, esta situación ilustra cómo usan las amenazas sobre la pérdida de empleos para crear divisiones entre los movimientos ambientalistas y sindicales. El movimiento ambientalista respondió publicando reportes que explican por qué la pérdida de empleos será mínima y resaltando que es más importante hablar de un cambio de empleos desde industrias de uso intensivo de energía hacia una cadena de suministro sustentable. El desafío, por lo tanto,

es cómo apoyar significativamente para capacitar en los nuevos empleos y a nivel más general.

Esta coalición fortaleció tanto al movimiento sindical como a las organizaciones ambientalistas y contribuyó a un mejor Acuerdo Sobre el Clima. Aun cuando hay mucho por hacer, la identificación de valores compartidos y el

énfasis en ellos ha sido un paso fundamental. El trabajo conjunto con respeto de la autonomía e independencia del otro ha probado ser una estrategia muy exitosa, sin necesidad de institucionalizar las alianzas. La coalición entre FNV y Milieudefensie se continúa desarrollando con una campaña sobre la transición justa planeada para 2020.

Reflexiones sobre las experiencias conjuntas: observaciones y tensiones

En el encuentro, se plantearon puntos de vista claves a partir de las reflexiones sobre el proceso de consolidación de alianzas en los distintos contextos que estaban representados. Estas ideas no reflejan toda la realidad de las situaciones que enfrentan movimientos y alianzas tan diversos (las y los participantes aquí presentes son una pequeña parte de toda una trama de movimientos, campañas y alianzas que existen a nivel mundial), pero se espera que estas reflexiones resuenen en otros contextos y contribuyan al debate y análisis. Con este fin, se presentan en primer lugar algunas observaciones claves sobre el proceso de organización conjunta y, a partir de ahí, se tratan algunos de los principios o aspectos fundamentales de la transición justa que se plantearon en la reunión.

Las alianzas se configuran de formas diferentes en distintos momentos

Las y los participantes comenzaron el taller reflexionando sobre las diferentes historias de lucha en sus contextos regionales y nacionales. Las y los participantes procedentes de Latinoamérica compartieron sus impresiones sobre la existencia de una estrecha colaboración entre los movimientos sindicales, ambientalistas y de defensa de los territorios desde hace décadas en su región. Las luchas colectivas frente a los tratados de libre comercio y la globalización neoliberal, entre otros, proporcionó el contexto necesario que propició este tipo de colaboración. No obstante, aunque los movimientos sindicales y ambientalistas sean diferentes, no son percibidos como

completamente separados o aislados, ni entre ellos, ni de otros movimientos sociales. Más bien al contrario, muchos movimientos no sindicales son muy conscientes de su identidad como trabajadores y trabajadoras, del mismo modo que los movimientos sindicalistas también han adoptado posiciones políticas en una diversidad de temas más allá de lo estrictamente laboral.

Por otro lado, en Nigeria y Sudáfrica, los participantes² apuntaron que, durante las épocas de las luchas por la independencia nacional y el apartheid, estos movimientos trabajaron estrecha y orgánicamente. Sin embargo, a esta época le siguió un periodo de colaboraciones menos frecuentes y estructurales. Tras unos años en los que sus acciones

colectivas se limitaron a intervenir en una serie de “asuntos de interés nacional”, como la corrupción o el salario mínimo nacional, los movimientos sindicales y ambientalistas han vuelto a fortalecer vínculos y construir análisis compartidos. Este movimiento se percibe relativamente en un proceso inicial de construcción conjunta. Temas como el salario mínimo, la corrupción y el debate sobre los estándares de vida han demostrado ser aglutinadores de diferentes organizaciones en torno a acciones y estrategias comunes. A medida que se incrementan los niveles de conocimiento y conciencia sobre los aspectos que afectan a la justicia ambiental, los movimientos sindicales y por la justicia ambiental intentan confluír para compartir conocimientos y análisis, y colaborar en alianzas estratégicas.



Mural en San Francisco, California, EE.UU. Foto tomada por Lyda Fernanda Forero en Septiembre de 2018.

En los Países Bajos, los movimientos sindicales y ambientalistas han formado parte de una tradición cultural de “izquierda”. Sin embargo, una estrecha colaboración que implique coordinación estratégica, objetivos y análisis comunes, aunque se esté intensificando, todavía se

Las alianzas en todos estos contextos son posibles. Es importante reconocer que las relaciones de solidaridad y de apoyo mutuo pueden desempeñar un papel fundamental, incluso cuando los análisis y las formas de organización interna de cada organización o movimiento difieran.

muestra en sus comienzos. Los participantes mencionaron que los movimientos sindicales y ambientalistas todavía son percibidos en cierto modo como entes separados, con un importante número de activistas dentro de estos movimientos que no necesariamente conciben los temas de una forma interconectada. Por ejemplo, aunque se apoyen acciones solidarias, muchos todavía analizan los problemas laborales y ambientales de forma aislada y promueven una división del trabajo entre movimientos según los diferentes temas.

Según las conclusiones alcanzadas, las alianzas en todos estos contextos son posibles. Es importante reconocer que las relaciones de solidaridad y de apoyo mutuo pueden desempeñar un papel fundamental, incluso cuando los análisis y las formas de organización interna de cada organización o movimiento difieran. Pero este tipo de intercambio puede ofrecer una oportunidad para articular un análisis compartido mucho más profundo, tal como se verá más adelante en la sección sobre los principios de una transición justa. Las acciones colectivas pueden abrir espacios necesarios que permitan a los movimientos y organizaciones identificar vínculos estructurales entre luchas aparentemente dispares.

Las crisis pueden catalizar colaboraciones más profundas

Las experiencias tanto en África como en Latinoamérica muestran que incluso los movimientos más dispares suelen unirse ante situaciones en las que los poderes económicos y políticos amenazan seriamente los derechos de los pueblos y sus luchas. En Nigeria y en Sudáfrica, las luchas de independencia y descolonización permitieron forjar alianzas entre grupos expuestos a amenazas y a circunstancias extremas, aun cuando en cierto modo perseguían objetivos diferentes. También en Latinoamérica,

donde los regímenes autoritarios y los gobiernos neoliberales supusieron un grave riesgo para las organizaciones sociales e impusieron grandes retos para su continuidad y acción, las circunstancias extremas trajeron consigo una confluencia de estrategias y luchas colectivas basadas en demandas y análisis comunes entre actores diversos. Es un patrón que se repite en la historia de alianzas en varios países, donde los movimientos de resistencia frente a la globalización neoliberal y las negociaciones colectivas en torno al salario mínimo, por ejemplo, o frente a las políticas de ajuste estructural permitieron abrir espacios de colaboración e impulsar nuevas alianzas.

Las acciones conjuntas deben reflejar la diversidad de prioridades

Los movimientos sociales definen sus acciones a partir de las creencias, los intereses y las necesidades de sus bases. En el caso de los sindicatos, este aspecto suele percibirse claramente en sus estructuras: sus miembros determinan los intereses y las campañas sindicales mediante un sistema democrático. En las organizaciones que luchan por la justicia ambiental, esta estructuración de las distintas responsabilidades no está tan formalizada debido, quizás, a la necesidad de evitar la represión

estatal en aquellos contextos donde los movimientos ambientalistas están criminalizados.

Más allá de sus estructuras formales, todas las organizaciones que participaron en el encuentro consideraron que responden firmemente a los intereses, necesidades y compromisos de los miembros que las conforman, lo que les permite definir objetivos estratégicos. Por lo tanto, la construcción de coaliciones y alianzas debe realizarse con el compromiso activo de sus miembros. En esta situación, pueden intervenir muchos factores, pero desarrollar y difundir un análisis consensuado destinado a confrontar las estructuras de poder es un tema fundamental. Al mismo tiempo, es importante que los miembros sean conscientes de la importancia que tienen las alianzas estratégicas para proteger y avanzar sus objetivos, tanto si se refieren a la protección del medio ambiente, el aumento de los salarios, la democracia energética o las condiciones de trabajo dignas.

Construir confianzas y desarrollar estrategias compartidas es un proceso de largo plazo

Los movimientos y organizaciones que trabajan por la transición justa proceden de una variedad de sectores y contextos distintos. Si bien es cierto que esta

diversidad presenta una ventaja importante porque contribuye a generar un movimiento representativo y amplio, también implica que los actores aportan desde sus diferentes trayectorias políticas, estrategias organizativas, creencias, intereses, compromisos, y sus propias bases y miembros. En este contexto, la construcción de confianza política requiere un proceso de largo plazo.

Además de contribuir a forjar alianzas entre las organizaciones sindicales y de justicia ambiental, la discusión sobre la transición justa puede también llegar a desempeñar un papel importante en el desarrollo y la teorización de un “espacio radical” transversal a distintos sectores de la sociedad civil.

Al mismo tiempo, las distintas organizaciones que confluyen dentro de un movimiento pueden diferir en cuestiones estratégicas claves. Por ejemplo, los debates en África subsahariana: en contextos de altos niveles de corrupción dentro de instituciones estatales débiles o poco confiables, algunos de los actores se muestran favorables a la revitalización de un modelo estatal,

mientras que otros promueven modelos de privatización parcial porque la consideran el camino más viable para salvar y democratizar parte de una institución pública. Las y los participantes de la reunión consideraron que es posible consolidar alianzas ante los retos que plantean este tipo de discrepancias, y puntualizaron que los modelos surgidos del intercambio de conocimientos y experiencias podrían ser muy fructíferos. Por ejemplo, los sindicatos en Nigeria han solicitado de forma activa información y formación de las organizaciones ambientalistas, consideradas entidades expertas con conocimiento fiable en temas relacionados con el clima y el medio ambiente. Sin embargo, construir alianzas a niveles más profundos, más allá de acuerdos temporales o campañas específicas, requiere procesos de construcción de confianza en donde el trabajo colaborativo y las estrategias compartidas juegan un papel fundamental.

Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales y de justicia ambiental colaboran de forma más amplia no solo entre ellas, sino con otras organizaciones y actores en el mismo ámbito y con otros sectores sociales. En todos estos espacios conviven perspectivas que son más o menos radicales; en todos los sectores de la sociedad civil existen actores

que persiguen agendas relativamente reformistas sin estar comprometidos con un cambio sistémico, o que no lo ven como una solución viable. Además de contribuir a forjar alianzas entre las organizaciones sindicales y de justicia ambiental, la discusión sobre la transición justa puede también llegar a desempeñar un papel importante en el desarrollo y la teorización de un “espacio radical” transversal a distintos sectores de la sociedad civil.

Las nuevas alianzas son susceptibles a enfrentarse a una oposición activa

En el contexto de cooptación mencionado anteriormente pueden darse situaciones en las que las organizaciones y coaliciones se tengan que enfrentar a la oposición activa de actores corporativos, gubernamentales o mediáticos, a la hora de articular conjuntamente una visión más radical de la transición justa. Por ejemplo, en los Países Bajos, tras la alianza construida entre FNV y Milieudefensie en torno a la discusión sobre el Acuerdo sobre el Clima, las grandes empresas usaron activamente los medios de comunicación para acusar a la alianza entre las dos organizaciones de ser responsable de la destrucción de empleos o de promover iniciativas negativas para los y las trabajadoras. Las aparentes diferencias de intereses entre los

movimientos sindicales y ambientalistas pueden ser explotadas y utilizadas por actores corporativos, cuyos intereses se pueden ver amenazados por alianzas más fuertes y análisis conjuntos entre las organizaciones sociales. La responsabilidad de las organizaciones para con sus miembros, unida a la importancia de la opinión pública, implican que dichas tácticas sean una amenaza para las acciones conjuntas.

Es posible que dentro de las bases de algunas organizaciones existan visiones opuestas, lo que dificulta la elaboración de una posición más radical sobre la transición justa y a la vez mantener unidad interna. Las y los participantes insistieron, por lo tanto, en la importancia de combatir activamente las tácticas que buscan profundizar la polarización. En primer lugar, es importante comunicar de manera clara, pública y transparente acerca de la decisión de construir alianzas y asegurarse de compartir con las bases, colectivos y comunidades afectadas las razones que las justifican. En segundo lugar, es fundamental combatir la desinformación por parte de las empresas transnacionales, la clase política y los medios de comunicación que intentan crear narrativas de miedo y proyectan un panorama de pérdidas de empleos como consecuencia inevitable de las acciones ambientales, y quienes

implícitamente apoyan una agenda de crecimiento económico ilimitado. Estas narrativas suelen ocultar las amenazas reales para el trabajo decente y los

derechos de las y los trabajadoras que se derivan de las nuevas relaciones de poder vinculadas a las tecnologías emergentes y las economías digitales.

Principios para una transición justa

Las reflexiones sobre las experiencias, retos y oportunidades extraídas de este tipo de alianzas ayudan a plantear algunos principios fundamentales de la transición justa, sin pretender presentar una definición exhaustiva ni cerrada del concepto. Estas consideraciones surgieron como algunas de las características fundamentales de un entendimiento

compartido sobre transición justa que va más allá de las definiciones más simplificadas que promueven algunos Estados y empresas transnacionales. Se espera que estos principios contribuyan a la construcción de una visión de transición justa que sea más resistente a la cooptación o captura por parte de quienes se oponen al cambio sistémico.

La transición justa puede resultar diferente según los lugares en que se produzca

La historia de la crisis climática es también la historia del capitalismo y del imperialismo. Al igual que la explotación laboral, los costos y beneficios de la extracción de recursos, la destrucción del ambiente y las emisiones de carbono se distribuyen de forma desigual tanto a escala global como nacional. Algunos países y algunos grupos o actores en particular dentro de algunos países se han beneficiado enormemente de este sistema, mientras que otros países (o grupos en cada país) son quienes sufren sus consecuencias desproporcionadamente. Todo debate sobre la transición

justa debe tener en cuenta que estas desigualdades globales históricas, que hoy en día continúan produciéndose, forman parte de un sistema que debe ser transformado para poder alcanzar una sociedad más justa y sustentable. Esto implica que la transición justa pueda significar cosas diferentes en lugares diferentes.

Por ejemplo, las y los participantes destacaron el hecho de que mientras la disminución del uso de energía es una de las grandes preocupaciones en algunas áreas del Norte Global, y

es considerada como una vía necesaria para reducir emisiones, en el resto del mundo, y especialmente en el Sur Global, la pobreza energética sigue siendo una realidad cotidiana. Además, algunas acciones para reducir el consumo se pueden convertir en medidas de austeridad elitistas, y por ende son contraproducentes en el contexto de la desigualdad y de la pobreza extrema que prevalece; dichas intervenciones pueden hacer imposible la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones históricamente marginadas. Estas desigualdades también se reproducen dentro del Norte y Sur geográficos; cada vez es mayor el número de comunidades periféricas y marginadas de Europa y Norteamérica que se enfrentan a situaciones de pobreza energética. Al mismo tiempo, siguen creciendo las empresas transnacionales, a menudo de capitales del Norte, que son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Sur geográfico. Por lo tanto, la construcción de una transición justa debe tener en cuenta las realidades y complejidades de la desigualdad global.

La marginación y la explotación presentan aspectos geopolíticos globales que deben ser abordados sin perder de vista otras dinámicas de explotación locales y regionales. Debemos orientar

nuestra búsqueda y acciones hacia preguntas como las siguientes: ¿cómo debemos usar la energía y los recursos? ¿energía para quién? y ¿para qué?, sin generalizar a partir de las condiciones de las élites globales. Esto supone, entre otras cosas, respetar los modos de vida y formas regenerativas de vida, por ejemplo, apoyando a las comunidades locales en sus luchas por el acceso y el control de los recursos y las fuentes de energía locales, en lugar de imponer soluciones de alta tecnología que por lo general requieren de un uso intensivo de capital, recursos y tecnología. Dado que dichas soluciones suelen estar en manos de empresas transnacionales, principalmente del Norte Global, tienden a reforzar las dinámicas globales de desigualdad, desempoderar a los países y las comunidades del Sur Global, y perpetuar la dependencia energética.

Del mismo modo, mientras la crisis climática a escala global motiva un activismo creciente entre los movimientos urbanos en el Norte Global, muchas comunidades marginadas continúan enfrentándose a la destrucción ambiental a nivel local, que inicialmente dio lugar a la aparición del concepto de la “justicia climática”. Los pueblos del Sur Global ya están sufriendo desproporcionadamente las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos

asociados a la crisis climática; muchos pueblos continúan también sufriendo la destrucción de sus territorios y el despojo de sus tierras en el ámbito local. Además, cada vez se da más el caso de pueblos que enfrentan la destrucción y expropiación de sus tierras y territorios en nombre de la “economía verde” y otras “falsas soluciones”. Desde la extracción de metales de tierras raras para generar “tecnologías verdes”, hasta proyectos de energía verde destructivos como las grandes represas, los grandes parques eólicos y las plantaciones de monocultivos para agrocombustibles, pasando por el establecimiento de “zonas protegidas” totalmente estériles que expulsan a las poblaciones indígenas y a los habitantes tradicionales de sus tierras y mares, las falsas soluciones agudizan las formas de marginación existentes y perpetúan la economía extractiva que se ha mantenido por varios siglos. La transición justa se afirma aquí como un marco de análisis inusualmente sólido para abordar estos retos. Sin embargo, para consolidar el término en el ámbito global, los y las activistas, en cualquier lugar, deben ser conscientes de la diversidad de situaciones que existen a nivel global, evitando caer en el “reduccionismo del carbono” que percibe las emisiones de gases de efecto invernadero como el

único problema en el sistema económico actual, y reconociendo las múltiples dinámicas estructurales opresivas que intervienen en los sistemas económico y energético global.

Por último, la transición justa debe tener en cuenta las diferentes situaciones históricas y políticas en distintos países, lo que a su vez determinará que las acciones destinadas a conseguirla pueden dar lugar a resultados múltiples. Para que las alianzas en el ámbito internacional sean efectivas, es necesario reconocer las diferencias en aspectos como la deuda, la tecnología, la propiedad del conocimiento, las patentes, la fuerza relativa del Estado y las empresas transnacionales, el nivel de democratización (de la energía), los niveles de represión, el autoritarismo o la corrupción, así como otros factores que pueden determinar las acciones políticas más apropiadas en cada contexto. Al mismo tiempo, debemos prestar atención a las dinámicas geopolíticas emergentes, y ser conscientes del riesgo que los conflictos en torno a los combustibles fósiles durante el siglo XX y principios del XXI sean reemplazados por otros similares en torno a los minerales de tierras raras o el agua, y que pueden reproducir las mismas guerras por los recursos y perpetuar la militarización y la el despojo.

La transición justa es una cuestión de clase

El concepto de transición justa reconoce que una serie de factores sistémicos importantes han definido nuestras sociedades y les ha dado su forma actual, dando lugar a una realidad donde los costos y beneficios de la actividad económica están distribuidos desigualmente. Uno de los ejes fundamentales de la desigualdad es la “clase”. Por “clase” nos referimos a la diferencia entre aquellas personas que, para ganarse la vida, dependen de la venta de su fuerza de trabajo, y aquellos que poseen recursos, herramientas, capital de inversión y otros medios que les permiten pagar y obtener los beneficios del trabajo ofrecido por los primeros.

Entre las personas que deben trabajar para vivir, pueden darse grandes diferencias en la escala de privilegios económicos: en este sentido, hablamos de trabajos bien o mal remunerados; de buenas o malas condiciones de trabajo; de empleo decente o precario; de buen o mal acceso a un sistema protección social inclusivo, etc. Estas diferencias se dan a escala global, pero también pueden darse en un país, región o ciudad. Con frecuencia, se dan en paralelo y se cruzan con otras formas de marginación: las personas que son discriminadas por pertenecer a una comunidad racial o por su identidad de género, personas con habilidades y capacidades



Marcha por la Justicia Climática durante COP 24 en Katowice, Polonia. Foto tomada por Lyda Fernanda Forero

diferentes, o quienes pertenecen a grupos de identidad subalternos son más proclives a encontrarse entre los y las trabajadoras menos privilegiados, y hasta ser excluidos de los mercados laborales. Estas desigualdades no siempre son reconocidas por algunos miembros de las organizaciones, lo que puede llegar a ser un obstáculo a la hora de organizar acciones colectivas, ya que los problemas de un determinado grupo pueden no ser prioridad en las agendas de los y las trabajadoras más privilegiados. A modo de ejemplo, puede darse el caso de que los y las trabajadoras más precarizados, temporales, estacionales, marginados o desempleados, cuyas cifras aumentan como consecuencia de las políticas neoliberales, no se sientan representadas por los sindicatos, a pesar de que estos hayan logrado victorias históricas en la defensa de los derechos laborales.

Sin embargo, al tiempo que es importante reconocer la solidaridad en las luchas por los derechos y la protección, la transición justa centra el debate en la cuestión del poder. Dicho de otro modo, la transición justa cuestiona quién

controla y quién se beneficia del uso de los recursos en el sistema energético. Si analizamos el asunto desde este ángulo, reconocemos que el sistema actual concentra el poder y los beneficios del uso de los recursos en manos de relativamente pocos actores, a la vez que distribuye los costos (incluida la destrucción ambiental) entre la mayoría de la sociedad, con un mayor impacto en los más marginados. Esta reflexión abre la puerta a debates más amplios sobre cómo se entienden el trabajo y el uso de recursos en una sociedad justa. En el marco de este debate, hay espacio para pensar en diversas soluciones dirigidas al aumento, o el establecimiento, de un uso y control democrático de los recursos y a la garantía del cumplimiento de los derechos humanos y laborales. Sin embargo, es importante colocar la cuestión del trabajo en primer plano inclusive el trabajo tradicionalmente no remunerado, por ejemplo, el cuidado de niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad, la provisión de comida en los hogares, etc. La transición justa plantea: ¿qué tipo de trabajo y de estilos de vida debería soportar nuestro sistema energético?

La transición justa es una cuestión de género

Las mujeres y otras identidades sexuales marginadas soportan las mayores

cargas del sistema energético actual y son las más expuestas a las violaciones

de derechos, en particular dentro de contextos de conflicto y violencia. El capitalismo fortalece y depende de las jerarquías sociales. Estas incluyen, pero no se limitan a, las jerarquías patriarcales para que la opresión de personas no varones pueda ser reforzada por otros tipos de opresión inclusive la racista y la de clase. Tanto los costos del sistema actual como los costos de los cambios al mismo tienden a imponerse sobre las personas oprimidas por una o más de las jerarquías actuales. Las divisiones misóginas y patriarcales del poder deben ponerse en el centro a la hora de debatir sobre la transición justa. En opinión de un(a) participante, si cambiamos el sistema sin dismantelar el patriarcado, seguiremos manteniendo los sistemas que oprimen a las mujeres.

Hoy en día, las mujeres también soportan la mayor carga de los impactos de la crisis climática. Tras los desastres climáticos, por ejemplo, la violencia basada en género suele aumentar, y las mujeres y las personas trans y no binarias suelen enfrentar caminos más difíciles para recuperarse frente a estas crisis, porque son mucho más proclives a estar en condiciones de pobreza. Las dinámicas extractivas suelen exacerbar las injusticias de género existentes: los beneficios y los costos de las actividades extractivas son distribuidos de forma

desigual en las comunidades y en las familias. A medida que se intensifica la crisis climática, estas dinámicas se acentúan cada vez más (por ejemplo, el 80% de las personas desplazadas tras algún tipo de desastre ambiental son mujeres).

Tras los desastres climáticos, por ejemplo, la violencia basada en género suele aumentar, y las mujeres y las personas trans y no binarias suelen enfrentar caminos más difíciles para recuperarse frente a estas crisis, porque son mucho más proclives a estar en condiciones de pobreza.

La marginación de las mujeres se relaciona también con cuestiones estructurales derivadas directamente de la forma en que se entiende y se valora el trabajo en el sistema económico vigente. El trabajo de cuidados, inclusive el trabajo de cuidar a los y las niños, a miembros de la comunidad que son mayores o están enfermos; de mantener a nuestros cuerpos y nuestras relaciones, familias y comunidades, y de cuidar del ambiente está infravalorado dentro de la economía, y la responsabilidad de este tipo de trabajo se ha

asignado desproporcionadamente a las mujeres. Reconocer el valor de ese trabajo “reproductivo”, que tiene por objeto la regeneración de la vida, en lugar de la producción de bienes para su venta constituye la piedra angular de un debate más profundo, sobre lo que consideramos una vida “decente”. Es importante darse cuenta de que el sistema de valores del patriarcado, que tradicionalmente ha infravalorado este tipo de trabajo, frente al trabajo considerado “productivo”, hace parte del sistema actual de opresión que ha tenido un papel fundamental en la crisis actual.

El proceso de reevaluación de nuestro uso de energía y de reconsideración sobre qué tipo de usos deberíamos valorar y preservar debe tener en cuenta el trabajo reproductivo. Los modos de uso de la energía que han desarrollado las mujeres y, en particular, en el ámbito doméstico, han sido con frecuencia invisibilizados o desdeñados. Aún más, como los salarios no suelen estar distribuidos equitativamente en las familias, las mujeres tienen mayor riesgo de estar en situaciones de pobreza energética. Adicionalmente, la presión de las economías extractivas también es una presión de los mercados, que utilizan a los cuerpos de mujeres como bienes. Es primordial que la transición justa no acentúe esa marginación de

las mujeres, por ejemplo, llevándolas a sufrir las mayores consecuencias de una reducción en el uso de la energía. Para avanzar hacia modelos de sociedad y economía que pongan a las personas y el planeta en el centro, es necesario atacar la desvalorización sistemática del trabajo reproductivo.

Al mismo tiempo, las mujeres suelen estar al frente de las resistencias, defendiendo sus derechos, tomando el liderazgo y aportando propuestas prácticas para una transición justa. Las innovaciones de las mujeres, con frecuencia infravaloradas, desempeñan un papel clave para plantear soluciones de los pueblos a la crisis climática. Las estructuras de poder patriarcal han excluido tradicionalmente a las mujeres, han oprimido sus visiones y utilizado sus cuerpos. En consecuencia, las visiones y perspectivas de las mujeres ante las dificultades, así como sus posibles soluciones, han resultado silenciadas de forma sistemática, o la transición ha funcionado como pretexto para profundizar las injusticias. Estas visiones conforman un amplio espectro de alternativas sistémicas que podrían ser ignoradas, si la transición energética continúa siendo definida desde las pautas patriarcales, extractivas y excesivamente dependientes en la tecnología e inspiradas en una economía basada en el uso de

combustibles fósiles. Los movimientos feministas han puesto al descubierto las raíces de nuestra relación destructiva con la naturaleza, desenmascarando el afán del “poder sobre” el entorno de la visión patriarcal. Al mismo tiempo,

han confrontado esta visión con alternativas integrales que pueden ayudar a construir una visión genuinamente transformadora de la transición justa basada en la sustentabilidad de la vida.

La transición justa es un marco anti-racista

Los patrones históricos y repetitivos de la desigualdad se basan en las ideologías y prácticas racistas, tanto en el ámbito global como, con frecuencia, en el ámbito nacional. Los pueblos racializados también soportan desproporcionadamente los conflictos ambientales: desde las comunidades negras que participaron durante décadas en las luchas por la justicia climática, pasando por las comunidades indígenas y campesinas que luchan por defender sus tierras y territorios tradicionales, hasta los países del Sur Global, sistemáticamente explotados por una economía basada en el saqueo sistemático de su patrimonio natural. En la era de la crisis climática, estas dinámicas se hacen cada vez más visibles, por ejemplo, a través de políticas migratorias racistas, que buscan bloquear la huida de refugiados climáticos. El término “racismo ambiental”, que condensa muchos de estos fenómenos, se desarrolló en la década de 1970 para describir las formas en las cuales los costos ambientales recaían

principalmente sobre las comunidades racializadas, y que son mucho más susceptibles de vivir en las llamadas “zonas de sacrificio” del capitalismo moderno.

Los elementos racistas del sistema actual, que se manifiestan en la desigualdad racializada, la opresión económica en el marco de la globalización y en una serie de políticas y prácticas racistas a todos los niveles, deben ser abordadas en el centro de las propuestas por una transición justa. Las cuestiones de compensación, redistribución y reparación deben ser tomadas seriamente en el debate sobre cómo transformar el sistema de energía existente, así como el modelo social y económico que dicho sistema sostiene. Los pueblos que más han sufrido la marginación y la explotación en el sistema actual deben participar activamente en la definición de las vías hacia una transición justa y tener un rol central en la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades. Esto incluye tanto los pueblos

indígenas como otros grupos racializados. De lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar el sistema racista, elitista, extractivo e imperialista, pero con fuentes de energía alternativas. Las dinámicas racistas pueden ser reproducidas muy fácilmente en una economía basada en energías “verdes” dirigida por empresas transnacionales que expulsan a los pueblos de los territorios, explotan la naturaleza y su trabajo, y dirigen los beneficios hacia las clases más enriquecidas y las ciudades del Norte, mientras que las comunidades pobres y del Sur enfrentan los conflictos socio ambientales consecuentes. Algunos de los elementos de estas dinámicas pueden

La larga historia de resistencia al imperialismo, la colonización y otros abusos también demuestra el papel fundamental que pueden desempeñar las comunidades subalternas en liderar una transición justa. Siglos de experiencia colectiva en resistir y avanzar contra el sistema imperialista han dejado muchos aprendizajes para los movimientos que luchan por un cambio de sistema.

percibirse en el contexto del compromiso de los países del Norte con la producción “verde” dentro de sus propias fronteras, al mismo tiempo que ignoran deliberadamente los comportamientos destructivos de sus empresas transnacionales en el resto del planeta.

Al mismo tiempo, la larga historia de resistencia al imperialismo, la colonización y otros abusos también demuestra el papel fundamental que pueden desempeñar las comunidades subalternas en liderar una transición justa. Siglos de experiencia colectiva en resistir y avanzar contra el sistema imperialista han dejado muchos aprendizajes para los movimientos que luchan por un cambio de sistema. En particular, las luchas de independencia y descolonización en África, Australasia y las Américas han influido en la definición de conceptos y tácticas de los movimientos de justicia climática a escala global. Desde el punto de vista del colonialismo y el imperialismo, las conexiones sistémicas entre la explotación ambiental, social y económica quedan al descubierto con una claridad poco usual. Las comunidades subalternas, tanto en el Norte como en el Sur globales, ya están avanzando en propuestas para una transición justa, y deben continuar asumiendo ese papel y permaneciendo en el centro de este debate.

La transición justa aborda más que sólo el clima

La crisis ambiental es más amplia que la crisis climática. Tal como se ha mencionado, centrarse exclusivamente en las emisiones es una simplificación de la crisis actual. Hay muchas formas de extracción causando catástrofes ambientales, perpetuando la desigualdad, vulnerando los derechos de los pueblos y destruyendo los modos de vida dignos y los ecosistemas saludables. Limitarse a las emisiones como el único problema abre la puerta a soluciones falsas que agudizan otras formas de crisis sociales y ambientales, con la excusa de mitigar el cambio climático.

En lugar de acoger la energía verde o las tecnologías de captura de carbono, la transición justa implica repensar nuestra relación con la vida no humana y entre las personas. Una transición justa implica avanzar desde un sistema económico basado en la extracción de recursos y en la explotación de los pueblos, hacia un sistema económico que, por el contrario, se estructura en torno a la restauración y regeneración de los territorios, la restitución de la dignidad y de los derechos de las personas. Las actividades económicas deben valorarse dentro de los ecosistemas en que se realizan, tanto en su dimensión global como local. Una transición justa plantea

entonces preguntas como: ¿qué tipo de relación con la naturaleza es capaz de sostener nuestras vidas, estilos de vida y el buen vivir en el largo plazo? ¿Cómo sería el uso de energía que mantenga la vida tanto humana como la no humana?

Los conocimientos indígenas y el trabajo de los y las defensoras de los territorios y los derechos humanos ambientales son una importante fuente de conocimiento para este proyecto. Las comunidades rurales organizadas de todo el planeta luchan por la soberanía alimentaria y por reformas agrarias que les permitan mantener medios de sustento no dependientes de los sistemas industriales basados en el uso intensivo de la energía. Las comunidades indígenas de todo el planeta están comprometidas con las luchas para proteger sus modos de vida frente a la expansión capitalista, y para defender una relación armónica con la naturaleza. Con frecuencia, estos movimientos se inspiran en visiones del mundo que colocan a las personas como parte integral de la naturaleza (y no por encima), con la que entablan una relación cíclica e interdependiente. Para avanzar hacia una transición justa, los conocimientos y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, campesinas, afro-descendientes y otras comunidades

tradicionales deben ser tenidas en cuenta como un aporte fundamental. Estas luchas son fuentes de solidaridad

procedentes de un movimiento más amplio, y que además aportan ejemplos de otras alternativas sistémicas posibles.

La transición justa se refiere a la democracia

La democratización es fundamental para un proceso de transición justa por dos razones. En primer lugar, los y las defensoras de los territorios y los derechos humanos ambientales corren el riesgo de sufrir represión y criminalización (tanto por parte del Estado como de otros poderes). En muchos lugares se da una tendencia creciente hacia los gobiernos autoritarios o de extrema derecha que erosionan los derechos de la gente que está al frente de las luchas ambientales. Se trata de una realidad muy presente en Latinoamérica en estos tiempos, donde personajes como Jair Bolsonaro, han lanzado campañas de desprestigio dirigidas explícitamente contra los movimientos por la justicia ambiental, pero también pueden constatarse casos similares en todo el planeta con la criminalización masiva de los y las activistas ambientalistas, entre las que se encuentran los y las defensoras del agua en Standing Rock (Dakota del Norte, Estados Unidos). Una democracia que protege las libertades y los derechos civiles y políticos de los pueblos es un requisito fundamental, mínimo e indispensable para conseguir

la movilización política y social necesaria que nos conduzca a una transición justa. La protección de los derechos básicos de los pueblos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales tales como el derecho a la alimentación y a la educación, es imprescindible para posibilitar las campañas eficaces, creativas, representativas y de largo plazo por la transición justa.

Al mismo tiempo, los conceptos de democratización y responsabilidad son componentes fundamentales de la transición justa. En la actualidad, la explotación de los recursos enriquece a un porcentaje ínfimo de personas, mientras que las poblaciones marginadas pagan el precio. Una transición justa se basa en conceptos como la democracia energética y la soberanía energética para elaborar una visión de un mundo en el que las personas tengan acceso a y control sobre los recursos que necesitan para vivir en condiciones dignas, y desempeñen un papel político en la toma de decisiones sobre qué uso se da a esos recursos y quién los usa.

La promoción y la defensa de la democracia es una visión central de la transición justa. Las luchas ambientales y por los recursos en muchas regiones del mundo están entrelazadas con, o son indistinguibles de los ataques más amplios a la democracia y los derechos de las poblaciones. No se puede abordar la violencia y la represión sin abordar también los asuntos ambientales urgentes, y la lucha por una democracia genuina, participativa, y sustancial no se puede divorciar de la lucha por una transición justa.

El cuestionamiento al poder, que está en el centro de la transición justa, implica el compromiso de transformar de manera democrática los procesos de toma de decisiones y de responsabilidades en la gestión de recursos, servicios públicos e infraestructura, entre otros temas claves.

El cuestionamiento al poder, que está en el centro de la transición justa, implica el compromiso de transformar de manera democrática los procesos de toma de decisiones y de responsabilidades en la gestión de recursos,

servicios públicos e infraestructura, entre otros temas claves. Es fundamental que los pueblos tengan soberanía sobre el uso y control de sus recursos, servicios públicos e infraestructuras, gobiernos, y medidas legales para controlar al poder corporativo. La visión de la transición justa se basa en garantizar la participación equitativa de todas las poblaciones en las decisiones sobre la gestión de la energía y otros recursos, garantizar un acceso real a los bienes y servicios que sirven de base para el disfrute de todos los derechos humanos (saneamiento, salud, educación, agua, alimentación, transporte, vivienda, etc.). Algunos participantes en la reunión lo expresaron en términos de “dominio público” o “cambio centrado en la gente”. Tal como se ha comentado con anterioridad, los mecanismos para conseguirlo pueden variar de forma significativa en función del contexto político, cultural, económico e histórico. Las y los participantes coincidieron en que, si bien es cierto que el respeto de las formas de vida y conocimientos ancestrales ha sido primordial, existe también la necesidad de pensar más allá del marco de que “lo sencillo es hermoso” y analizar soluciones como los modelos de propiedad pública democrática, que en algunos contextos pueden conducir a cambios a gran escala muy rápidamente.

Existe el riesgo de que la magnitud del reto al que nos enfrentamos pueda ser cooptado por algunos actores que argumenten en favor de soluciones cada vez más autoritarias. Para detenerlos, es preciso proponer ideas argumentadas que apuesten por un

cambio ampliamente participativo y democrático. Por tanto, un concepto de la transición justa insistirá no solo en alcanzar el fin último de la transición: lograr justicia; sino que también incidirá en el proceso por el cual esa transición debe llevarse a cabo.

Captura corporativa y soluciones falsas

Como ya se ha destacado previamente, la transición justa consiste en cambiar el sistema de energía, y no solo las fuentes de energía. Los actores que se benefician del sistema actual se oponen en general a este tipo de transformación. Estos se dedican a hacer lobby para establecer una visión sobre la transición que implica, como objetivo primordial, la sustitución de una fuente de combustible por otra, sin abordar debidamente las cuestiones claves relacionadas con la propiedad, el alcance, el uso ni la distribución de dicha energía. Por un lado, las y los defensores del “crecimiento verde” plantean, tanto implícita como explícitamente, que es posible e incluso deseable mantener intacta la estructura básica de producción y consumo, aunque admitan ciertas concesiones para garantizar la “sustentabilidad”, por ejemplo, acogiendo los agrocombustibles o las energías verdes. En esencia, las y los defensores de una transición corporativa aspiran a no alterar las relaciones de poder

establecidas y sólo basarse en el uso de fuentes de energía distintas.

Por otro lado, la transición justa percibe la crisis climática como la manifestación de un malestar sistémico mucho más amplio. La desigualdad creciente, el despojo masivo, la profundización del autoritarismo, la captura corporativa de la democracia y la destrucción ambiental son distintas manifestaciones que revelan las grietas de un sistema enfermo. Resolver la crisis climática sin tratar las causas sistémicas que la provocan es prácticamente imposible, pero además es altamente indeseable. Este enfoque que aspira a tratar un solo síntoma de una enfermedad mayor puede llegar a agravar otros síntomas. Por ejemplo, cuando en lugar de apostar por la democracia y la soberanía energética del Sur Global, se implementan una serie de soluciones de energía “verde” de tecnología avanzada, como los campos de paneles solares y los grandes parques

eólicos, a través de formas que potencian la dependencia de estos países con las empresas transnacionales y con los países del Norte. En demasiadas situaciones, estas soluciones falsas dependen de modelos laborales que promueven y consolidan la precarización del trabajo, libera a los empleadores de sus responsabilidades frente a los y las trabajadoras, y terminan siendo vías libres para su explotación.

Algunos gobiernos y empresas transnacionales confluyen en visiones limitadas de la transición justa que se enfocan enteramente en una transición energética corporativa, posicionando a las mismas empresas transnacionales que han provocado la crisis climática como los actores claves en la identificación de las “soluciones”. Dichas visiones ignoran las críticas respecto de la justicia social y ambiental y desmienten o desvaloran la importancia del control democrático y la propiedad pública. Cualquier debate sobre la transición energética y la energía verde que no tenga en cuenta las consideraciones de la justicia social y ambiental corre el riesgo de analizar un único síntoma, perpetuando de las dinámicas de poder y las características sistémicas que condujeron a la crisis actual.

Pensar en un cambio transformativo del sistema de energía requiere ir más allá

de las actuales políticas energéticas y considerar las estructuras económicas y políticas que mantienen el sistema actual. El régimen de comercio e inversión es fundamental en mantener el poder de las empresas transnacionales para defender su visión de crecimiento verde y bloquear la acción de los movimientos populares por una transición justa. El Sistema de Solución de Disputas Inversor-Estado que está presente en la mayoría de acuerdos comerciales y de protección de inversiones, pone herramientas eficaces en manos de las empresas transnacionales para bloquear a los gobiernos que intenten implementar leyes ambientales que, en opinión de las empresas transnacionales, puedan perjudicar sus ganancias. El Tratado de la Carta de la Energía, en particular, ofrece ejemplos escandalosos del tipo de instrumentos que han permitido a las empresas transnacionales detener cambios positivos en proceso, como lo demuestra la amenaza de demanda por parte de la empresa alemana Uniper al gobierno holandés por su compromiso a cerrar las plantas de energía de carbón para 2030. Este es un ejemplo del papel que desempeña este tipo de mecanismos jurídicos en la protección de los aspectos más perjudiciales del sistema energético actual. La batalla por una transición justa, por lo tanto, deberá combatir seriamente la cuestión de la captura corporativa de la democracia.

Conclusión

En lugar de promover un crecimiento verde liderado por el capital, tenemos que pensar seriamente en cuestiones como: ¿energía y recursos para quién?; ¿trabajo y energía para qué?; ¿cuánta energía se necesita y con qué fin?; ¿quién la controla?; ¿se podrían controlar los recursos energéticos y la distribución de trabajo en la sociedad de un modo más justo y democrático?; ¿cómo podemos garantizar que toda la población tendrá los modos que necesita para llevar una vida digna?; ¿cómo debería nuestra sociedad tomar las decisiones sobre los usos de la energía, los servicios públicos y los recursos?; ¿qué tipo de uso de la energía y los recursos es el adecuado para llevar una vida digna y, a su vez, respetar las relaciones regenerativas con la naturaleza y el territorio? Romper con la convicción dogmática de que el crecimiento ilimitado es necesario. ¿Cómo se hace? Hay que replantear el debate económico, trasladando el énfasis desde la obtención de ganancias y la productividad de las inversiones hacia cuestiones relacionadas con la satisfacción de las necesidades humanas en armonía con la naturaleza.

Ahora bien, para que el debate resulte genuinamente transformativo tiene que reconocer las experiencias de

marginación, explotación e injusticia que contribuyeron a construir y a mantener el sistema energético actual. Los movimientos sociales a nivel mundial luchan no solo contra el poder corporativo para frenar la destrucción ambiental y territorial; también luchan por su derecho a construir y materializar visiones emancipadoras. El debate sobre una transición justa no solo ofrece un marco para enfrentarse a las injusticias, sino también el inicio de un marco posiblemente compartido para concebir una sociedad más justa e inclusiva, y una relación más respetuosa con la naturaleza.

La construcción colectiva de una visión de la transición justa se encuentra todavía en proceso. Sin embargo, es bastante significativo el surgimiento de una alianza creciente de movimientos internacionales que apuestan por una transición justa. Debido a la naturaleza global y sistémica de la crisis climática, y al gran impacto de las disparidades globales, por ejemplo, en las emisiones históricas, una visión internacional es trascendental. Como hemos presentado con anterioridad, esta visión global debe tener en cuenta la diversidad de las diferentes situaciones concretas y las distintas formas en que puede manifestarse una transición justa. Finalmente,

es prioritario profundizar en análisis colectivos que coloquen la clase, el racismo, y la identidad de género en el centro del debate y reconozcan el papel de las comunidades marginadas en las resistencias, para construir un movimiento popular global por la transición justa.

Este debate representa sólo uno de los muchos momentos que se están dando a nivel global. No obstante, esta conversación contribuyó a perfilar acuerdos y visiones compartidas sobre varios puntos claves, incluido el hecho de que la transición justa, en lo fundamental, no se trata (sólo) de un debate sobre la energía, sino sobre el poder. Los y las participantes hicieron hincapié en la importancia de establecer

una visión más amplia del cambio social y político que considere todas las formas de marginación y que resista tanto a la captura corporativa como a sus limitadas soluciones técnicas. Por último, los debates permitieron vislumbrar posibilidades de que la transición justa sirva como un marco unificador para generar confluencias entre luchas y movimientos, abriendo nuevas vías de solidaridad y colaboración. En un contexto en el que los efectos de la crisis climática se intensifican, en el que los movimientos autoritarios en el mundo resurgen y las empresas transnacionales obtienen mayores beneficios de las falsas soluciones, vendiéndose como los nuevos salvadores del planeta, este debate no sólo deviene necesario, sino absolutamente urgente.

Notas al Final

- 1 “Distribución equitativa de beneficios y costos”, July 2018. Milieudefensie, Natuur en Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, ODE Decentraal, FNV, de Woonbond, ActionAid, Oxfam Novib, Both ENDS, TNI and De Jonge Klimaatbeweging
- 2 Desafortunadamente, las y los participantes de Sudáfrica no pudieron acudir a esta reunión debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, las y los participantes que habían colaborado con las organizaciones sudafricanas en campañas y acciones presentaron algunos análisis sobre la región que han sido incluidos en este informe. Como las y los participantes no pudieron compartir sus experiencias en directo, no hemos incluido un caso separado para ilustrar la situación en Sudáfrica, pero queremos que conste que también se están produciendo colaboraciones dinámicas y consolidadas en este contexto.



**Amigos de
la Tierra**
América Latina
y el Caribe

